



Asunto: CONTRATOS PÚBLICOS

Nº Expte.: 1-17962

Fecha: 13 / 2 / 2018

Con fecha 9 de octubre de 2017, tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa, solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud formulada por [REDACTED] que quedó registrada con el número 001-0017962.

En la misma, se solicita lo siguiente:

"Me gustaría obtener una relación de todos los contratos celebrados desde 2013, que han sido asignados a los códigos de proyecto de gasto 201114003000300 y 201114003000301, con indicación del objeto del contrato, fecha e importe total. Les agradecería que el formato de la información fuese reutilizable (por ejemplo, en formato XLS o CSV)."

Con fecha 18 de octubre de 2017 se determinó que la competencia correspondía a la Dirección General de Asuntos Económicos, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, se acordó ampliar el plazo máximo de un mes para resolver y notificar la solicitud realizada.

El artículo 14 de la citada Ley establece que el derecho de acceso puede ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional o la defensa entre otras razones. Y el artículo 16 de la misma Ley señala que en los casos en los que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite.

La información sobre los contratos solicitada incluiría una gran cantidad y diversidad de los mismos, pues obedece a todas las necesidades económicas surgidas para la adquisición, sustitución, reparación o mantenimiento de toda clase de material, sistema de armas o vehículos que se han destinado a operaciones de mantenimiento de la paz en el exterior o se han repatriado a territorio nacional y ha sido necesaria su puesta a punto para la continuidad de su funcionamiento.



Estos gastos se han producido tanto en España como en aquellos países donde se llevan a cabo las distintas operaciones exteriores. Gastos que han sido certificados y fiscalizados para comprobar su destino a la finalidad para la que se aprobaron.

Por ello, el conocimiento de todos los contratos realizados para las misiones internacionales afecta a la defensa nacional, pues puede dar lugar al conocimiento de cuestiones tales como las reparaciones, sustituciones, que supondrían una vulnerabilidad y un peligro para el funcionamiento de la misión y de sus componentes.

En este sentido, el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece que ningún Estado miembro está obligado a facilitar información cuya divulgación considere contraria a los intereses esenciales de su seguridad; todo Estado miembro podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales para su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra.

No obstante lo anterior, todos los contratos que no están afectados por el citado artículo 346 del TFUE y que cumplan con los requisitos para su publicación están publicados en la plataforma de contratos.

En consecuencia, una vez analizada la solicitud, la Dirección General de Asuntos Económicos, considera que la misma incurre en los supuestos contemplados en los expositivos precedentes concediéndose el acceso parcial, señalando el siguiente enlace, mediante el que se puede acceder a los contratos publicados <http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/buscar.htm?pag=1&categoria=licitaciones&categoriasPadre=conconvsub&ente=E00003301&lang=es>

También se adjuntan los enlaces de los documentos existentes en la Plataforma de contratación del Estado relacionados con los proyectos de gasto 201114003000300 y 201114003000301,
[201114003000300](#)
[201114003000301](#)

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano correspondiente de este orden jurisdiccional en el plazo de dos meses, (artículos 46 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa), o previa y con carácter potestativo reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes, (artículo 24 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), en ambos casos el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS,

- José Luis Ruiz Sumalla -